

El Sistema de partidos en Sinaloa en el marco de la Reforma Política

Eufemio

1. Introducción

Sinaloa fue una de las pocas entidades del país en donde no se establecieron las reformas de ajuste a la ley electoral local conforme a la reforma electoral federal de 2007-08. Solamente se adecuó la fecha de elección coincidente con el día general de elecciones, sin embargo, la ley electoral local ya representaba atraso con puntos pendientes de reforma. Entre los déficit en materia electoral se encuentran la *redistribución*, que ponga fin a la desproporcionalidad que existe en la asignación de curules en el congreso local; la *reducción del congreso*, ajustando el número de diputados de acuerdo al criterio poblacional; *transformación de órganos electorales*, que los lleve de cambiar de los actuales Consejos a Instituto, con lo que se prevé una mayor profesionalización de los órganos electorales y de la permanencia en el trabajo administrativo-electoral; una *Ley de Participación Ciudadana*, que considere tanto figuras como las candidaturas independientes, para los procesos electorales como las consultas, referéndum, plebiscito, entre otros; *financiamiento público* para campañas electorales, *acceso de partidos a medios de comunicación* y el registro de partidos políticos locales y barreras electorales.

Algunas de estas reformas pendientes coinciden con las propuestas de reforma política que se presentaron y discutieron en el Senado de la Republica en los últimos dos años. De manera particular, para el sistema de partidos, las iniciativas de modificación se han acercado a las modalidades del financiamiento y sus fórmulas de distribución, coaliciones electorales, candidaturas comunes e independientes, transparencia y rendición de cuentas, democracia interna, y la disolución de bienes de los partidos políticos con la pérdida de registro (Moya, 2003: 50-51), pero muy poco analizan la apertura a la arena electoral y el acceso a la representación política.

Son precisamente sobre dichos puntos los que atiende el presente trabajo, en la idea de conocer *¿Cómo se ha desarrollado el proceso democrático en Sinaloa?* *¿Cuáles son los cambios necesarios para avanzar en el proceso de pluralidad política?* *¿Cómo se caracteriza el sistema de partidos?* *¿Cómo se ubica Sinaloa con el resto de las entidades del país en cuanto a las reglas electorales del sistema de partidos?*

El objetivo del presente trabajo es indagar respecto a nuestro sistema de partidos y dentro de la discusión de la Reforma Política en Sinaloa, la situación de cómo nos ubicamos en el marco nacional. Para ello se estableció una comparación con el resto de las entidades del país mediante un análisis de las leyes electorales locales y constituciones políticas de los 32 estados del país. La exposición se desarrolla en cuatro partes, la segunda recupera la teoría de cambio político y los procesos de transición democrática; la tercera, hace un rápido recuento de cómo se han desarrollado dichos cambios en la entidad; cuarta, profundiza sobre un abordaje metodológico y hallazgos respecto al análisis de las leyes electorales; por último, a manera de conclusiones se recuperan los elementos más importantes.

2. El cambio en los sistemas políticos

La teoría del cambio político establece que los procesos de transición desde un gobierno autoritario pasan por cuatro etapas; a) *crisis autoritaria* con que da inicio el proceso; b) *transición* que abarca las fases de liberalización y democratización; c) *instauración democrática* (O'Donnell, Schmitter y Whitehead, 1991:16); d) *Consolidación democrática*. Aunque estos procesos no son ciertamente tan lineales, esquemáticos y predecibles, puesto que por un lado puede existir la etapa liberadora y no democratizadora o simplemente el proceso transicional no arribe a la instauración de un régimen democrático. (Camou, 2000:226). En la perspectiva de consolidación Alcántara elabora un modelo para el análisis de las transiciones en las que analiza cinco elementos básicos: las características del régimen anterior, el colapso del mismo, la estrategia del cambio, las características del nuevo régimen y el escenario internacional.

Un proceso de transición exitoso a la democracia, en sentido estricto concluye con la instauración de un régimen democrático y esto se produce cuando se da una aceptación mayoritaria por parte de la ciudadanía y los actores estratégicos relevantes en las reglas del juego. De esta forma se dice que una democracia está consolidada cuando, bajo ciertas condiciones políticas y económicas dadas, un sistema concreto de instituciones se convierte en el único concebible y nadie se plantea la posibilidad de actuar al margen de las instituciones democráticas. Los perdedores sólo pueden volver a probar suerte en el marco de las mismas instituciones en cuyo contexto acaban de perder” (Przeworski, 1995).

Por otro lado, durante el proceso de transición la característica fundamental es la indefinición o la incertidumbre sobre las reglas del juego. Es este periodo donde los actores políticos luchan por definir reglas y procedimientos que determinaran probables y futuros ganadores y perdedores. El interés principal se basa en las reglas electorales que configura sistemas electorales y de partidos, que son los espacios propicios para el crecimiento o expansión de los actores políticos.

En lo que respecta al estudio de los sistemas de partidos, Sartori señala que éstos están influidos y determinados por la naturaleza de los partidos que lo componen, al mismo tiempo el modelo de interacción típica del sistema influye en la naturaleza y el comportamiento de sus unidades particulares. En tal virtud, el estudio sobre los partidos políticos puede realizarse en dos sentidos: a) en su propia dinámica organizativa; b) como parte del sistema de partidos (Sartori, 1980:17-19). En este último existen distintos modos y enfoques para analizar la naturaleza de los sistemas competitivos y se han formulado también distintos criterios en referencia a los fines concretos de la investigación. Tales enfoques pueden ser *genéticos, morfológicos y de competición espacial e institucional*.

Los *Genéticos* son aquellos que analizan los procesos a través de los cuales se desarrollan y se cristalizan los sistemas partidistas en una configuración concreta específica. Este proceso de estructuración originaria tiene lugar, por lo general, en el periodo comprendido entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera guerra mundial, y se deriva de los procesos de democratización y extensión del sufragio que sientan las condiciones sobre las cuales se basa la competición partidista moderna. Estos procesos, comunes a todos los países occidentales, tienen lugar, sin embargo, con

tiempos y modalidades distintos según los casos a un conjunto de fracturas político-sociales ligadas sobre todo a la formación de los Estados nacionales. Los *Morfológicos*, estudian las interacciones competitivas entre unidades, proporcionando una información relativa a la concentración-dispersión del poder, pero sobre todo indicando la mayor o menor complejidad de sus interacciones. Entre algunos de los criterios de análisis de este enfoque se encuentran la clasificación entre partidos de vocación mayoritaria y minoritarias (Duverger 1987); la distancia media en puntos porcentuales que separa al partido más fuerte de la mayoría absoluta, el segundo del primero, al tercero del segundo y así sucesivamente (Rokkan, 1968:173-210); la suma de los votos de los partidos del orden de fuerza creciente (Lijphart, 1968:3-44); la configuración de los sistemas partidistas con relación al número de sus componentes, como a la distribución de la fuerza electoral, desarrollando un índice de fragmentación que resume en una medida única que varía de cero a uno (Rae, 1971); o por la posición de poder determinar una de las posibles mayorías, o cuando su presencia tenga influencia en las tácticas de competición de los demás partidos en el sentido de alterar la dirección de la competición partidista de los partidos políticos de carácter gubernamental (Sartori, 1994:224-227). Finalmente, el enfoque de *modelos de competencia* tiene su origen en la analogía entre el modelo económico del funcionamiento del mercado y del sistema de partidos, y tiene entre sus principales precursores y exponentes a Shumpeter y Downs. Como elemento explicativo está constituido por la distribución de las opiniones y de las elecciones de los electores sobre el continuum, que se describe por lo general en términos derecha- izquierda en referencia a la intervención del Estado en la esfera económica.

3. Régimen Político en Sinaloa

El régimen político sinaloense ha sido definido como un régimen de tipo *hegemónico cerrado*, pues a diferencia de lo que sucedía en el ámbito nacional desde 1963, en Sinaloa no se abrieron espacios de representación política para la oposición sino hasta la reforma de 1979. (Norzagaray, 2002).

En la entidad “se llevo a cabo una transición prolongada conducida por la coalición dominante, mediante ciclos de elecciones y reformas de reglas de juego electoral y de la representación política, que tras 16 años de iniciada satisfizo en mínimo indispensable las condiciones de competencia y competitividad electoral, instaurando por esta vía una democracia minimalista, con una institución autoritaria débil, que aún permanece a mas de una década”. La transición se ha caracterizado por el gradualismo reformista de las leyes electorales y un avance lento pero constante hacia el pluralismo político a través de las elecciones (Luque, 2009). Dicho gradualismo estuvo presente, esencial y originalmente en las normas de acceso a la competencia y las formulas de distribución de los escaños legislativos.

Cambios en el diseño del sistema electoral

En Sinaloa la ley de 1924 preveía un total de 15 distritos uninominales, con criterios demo-orientados (Reynoso, 2004:16) que fueron reducidos a 13 en con la ley de 1968. Posteriormente en la ley de 1974 se introdujo por el criterio terraorientado o geográfico que otorgaba al menos un diputado por adicional por cada 150 mil habitantes o fracción que excediera de 75, 000, razón por la cual el número de diputados elegidos por el principio mayoritario aumento de 13 a 18, de los cuales 17 correspondían a los

municipios hasta entonces existentes y uno más a Culiacán atendiendo el criterio demográfico, estableciendo con ello un sistema mixto de distritación. (Luque, 2009:133)

La reforma política de 1979 en Sinaloa introdujo el sistema mixto de representación en el Poder Legislativo estatal y en los Ayuntamientos para los municipios que contaran con 200 mil habitantes o más. Las formulas establecidas en dicha legislación fueron: la mayoritaria, por la que se elegirían 23 diputados en igual número de distritos uninominales; *de representación proporcional*, por la cual se elegirían hasta 6 legisladores en una sola circunscripción estatal. Para que los partidos tuviesen derecho a registrar las listas de candidatos por el principio de RP, el artículo 6 de la ley electoral establecía deberían acreditar que participaban con candidatos a diputados de MR en por lo menos 7 distritos electorales uninominales. En cuanto a la formula de asignación de legisladores de RP a los partidos, el mismo artículo tercero establecía que solo tendrían derecho a que se les asignaran diputados de RP a los partidos que no obtuvieran 4, ó más constancias de mayoría y que como mínimo alcanzaran el 2.5% del total de la votación recibida en todas las listas estatales.¹

Las formulas se complementaban con las prevenciones restrictivas de la representación en contra de la oposición. El mismo artículo 6 de la ley electoral de 1979 establecía que “cuando dos o más partidos con derecho a participar en la distribución de diputados de RP obtuvieran en su conjunto 6 o más constancias de mayoría solo serían objeto de reparto 3 de las curules que deban asignarse por el principio de RP”. Las prevenciones establecidas en la ley tenían un objeto claro abrir de manera

¹ Artículos 1, 4, 11, de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, 1979.

controlada los espacios de representación en el poder legislativo a la oposición, para ello se estableció un diseño de formulas de asignación de RP hasta contemplar la posibilidad de no asignar ninguna diputación por este principio, esto en caso de que presentarse los supuestos hipotéticos en las que la oposición hubiesen obtenido cada uno de ellas cuatro triunfos de mayoría.

En 1984 como consecuencia de la reforma al artículo 115 de la Constitución Federal el Congreso del Estado, a iniciativa del gobernador Antonio Toledo Corro, reformó la Constitución local, incorporando en todos los municipios de la entidad el principio de RP en la integración de los cabildos, ya no solo para aquellos cuya población superara los 200 mil habitantes. No obstante, la formula proporcional siguió conservando una alta barrera legal de 10% de la votación a los partidos para acceder al reparto. Asimismo una prevención similar de que en el caso que un solo partido alcanzara ese umbral, solo se adjudicarían la mitad de las regidurías a asignar por ese principio. Con ello se pretendía también en el ámbito municipal evitar la formación de bloques opositores unificados, el objetivo era dividir en dos o más ámbitos los más visibles, el de la izquierda socialista (PSUM-PMS) y el del PAN.

En 1989 de nueva cuenta fue reformada la ley de 1979 introduciendo cambios en el diseño de la fórmula electoral, particularmente a la barrera legal de acceso al reparto, pasando de 2.5 a 1.5% para el caso de los diputados y de 10 a 5% para los regidores. Aunque las prevenciones legales que permitían al partido oficial y al gobierno mantener los bloques mayoritarios calificados no se alteró en esta reforma.

Fue hasta 1992 que se creó una nueva ley electoral. En ella se introdujeron verdades transformación al sistema electoral. En lo que se refiere a la formula se

establecieron por primera vez en la legislación los criterios de asignación de escaños de representación proporcional atendiendo al porcentaje de votos obtenidos por cada partido en la elección respectiva. Se aumentó el número de diputaciones de RP, pasando de 6 como máximo a un número fijo de 16 elegidos en tres circunscripciones plurinominales, estableciéndose en la integración del congreso una proporción de 60/40 % de diputados electos por el principio mayoritario y proporcional, respectivamente. Dicha proporción ya había sido adoptada en la legislación federal para la integración de la cámara de diputados desde 1986. La ley de 1992 fue el producto reciente de un amplio acuerdo entre los partidos políticos y el gobierno local.

En 1995 y 1998 se introdujeron sendas reformas que fueron de suma importancia para la transición. Los cambios no significaron avances en la proporcionalidad de votos/representación, al contrario introdujo criterios y barreras electorales que acentuaron la representación ponderada del PRI, entre ellos destacan las formulas matemáticas para la asignación de escaños de RP en el Congreso Local y la de regidores de los Ayuntamientos. Los elementos de dichas formulas *votación estatal emitida* porcentajes mínimos votación efectiva, valor de asignación, ajustado, cociente natural, restos mayores, y la implícita clausula de gobernabilidad. Se combinaron desde entonces para introducir en cada elección representación ponderada que no permitiera que se reflejara la verdadera pluralidad política en ambos ámbitos institucionales de la entidad. (Cuadro 1)

Cuadro 1. Modificación de los umbrales de votación en Sinaloa

Año	Umbral mínimo de votación	
	Congreso Local	Ayuntamientos
1974	4	
1979	2.5	10
1989	1.5	5
1992	1.5	2
1995	2	2

Fuente: Elaboración propia

El pluralismo político favoreció la formación y estabilización social de un sistema de partidos, *hegemónica con oposición* con participación semicompetitiva en los procesos electorales, que mediante cambios graduales en las reglas de la competencia y diseños electorales hicieron posible pasar de esta etapa de elecciones semicompetitivas a otra en la que la oposición logró altos niveles de competitividad. (Norzagaray, 2002)

Sin embargo aun surge la duda respecto a las posibilidades que abren las reglas electorales contempladas en el sistema de partidos para generar condiciones de competencia y pluralidad política. Elementos como las barreras electorales, que se fueron modificando paulatinamente en Sinaloa muestran que se ha avanzado significativamente. Dichas reglas en ocasiones guardan cierta congruencia en el COFIPE, pero también distan mucho de las legislaciones electorales de otras entidades del país.² El problema no es menor, dado que reglas electorales estrictas o difíciles de alcanzar limitarían la entrada de nuevas expresiones políticas a la arena electoral y la representación de nuevos intereses en el espacio público.

² En el derecho electoral suele emplearse como sinónimo los vocablos de barrera electoral, barrera legal, barrera mínima o también umbral mínimo de votación. En cualquiera de sus acepciones, se entiende por éstas a las disposiciones normativas que regulan o limitan el acceso a la participación de algunos partidos políticos o candidatos en la vida de una sociedad política que no hayan alcanzado una votación determinada, y por lo tanto, no tienen el derecho de ocupar un escaño en el Parlamento o Congreso (Manchego y Belaunde, 2003: 97-101).

La barrera electoral es uno de los elementos configurados de los sistemas políticos electorales contemporáneos que actúan de manera decisiva en el destino o futuro de los partidos políticos. Con ello se les limita el derecho a la designación de escaños, no por medio de factores inherentes al sistema electoral sino por determinantes de condiciones especiales. Contrariamente a las barreras fácticas que existen en los diferentes tamaños de las circunscripciones, la barrera legal está determinada por la ley. En consecuencia, es un obstáculo electoral para el ascenso de los partidos políticos minúsculos en el quehacer diario de la vida nacional. No hay, sin duda, equilibrio justo entre los partidos, por tanto las diferencias son notorias como resultado de la votación y las oportunidades de ocupar un escaño son iguales (Nohlen, 1987).

Las barreras electorales de exclusión constituyen una de las técnicas del parlamentarismo racionalizado. Son propias de sistemas electorales de principio de elección proporcional y su introducción tiene un objetivo muy preciso: impedir la excesiva fragmentación política en el seno de los parlamentos, facilitando de ese modo la formación de mayorías parlamentarias sólidas que sustenten gobiernos estables y evitando, si no la constitución, al menos la proliferación y crecimiento de grupos parlamentarios mixtos sin coherencia política interna.

Con el objetivo de conocer en qué situación se encuentra Sinaloa en el marco nacional se estableció una comparación con el resto de las entidades del país mediante un análisis de las leyes electorales locales y constituciones políticas de los 32 estados del país.

4. El sistema de partido Sinaloense en el ámbito nacional

El abordaje metodológico

Para el análisis del sistema electoral se toma en consideración el *enfoque genético* que se centra en los procesos a través de los cuales se desarrollan y cristalizan los sistemas partidistas. Ello en virtud de que los diseños institucionales originales establecieron tendencias a través de las cuales caminaron los procesos de reforma político-electoral. De igual forma se adopta el *método comparado* que mediante el cotejo permite vislumbrar similitudes y diferencias entre la legislación federal y el ámbito estatal. Dado que es posible identificar dentro de los sistemas de partidos elementos que marcan ***la entrada y salida de la competencia electoral***, así como ***el acceso a la representación*** política, la hipótesis que guía el presente trabajo es que, lo que caracteriza a la mayoría de las entidades del país es el bajo acceso a la competencia electoral y a la representación legislativa que poco coincide con la legislación federal. Como parte de la operacionalización de la hipótesis se toman como dimensión empírica el acceso a la competencia electoral mediante el análisis de las variables *Proporción de afiliados sobre el padrón estatal electoral (PAPEE)*, *Distribución territorial de éstos en distritos o municipios de la entidad (DADE)*, *Umbral mínimo para la pérdida del registro (UMPREG)*. En la dimensión empírica de acceso a la representación se toman las variables de *Proporción de candidaturas de mayoría relativa en distritos o municipios (PRCMR)*, *Barrera electoral para la distribución de regidores (BERP)*, *Barrera electoral para la distribución de diputados plurinominales (BEDL)*. Para recuperar la información se toman como *unidades de análisis* las constituciones políticas y leyes electorales de

las 32 entidades del país. Para el procesamiento de la información se construyó una base de datos mediante el SPSS.

De la información recabada, en lo que respecta a la *proporción de afiliados sobre el padrón estatal electoral* (PAPEE), estas iban desde el 0.04 al 2.5, identificando 19 indicadores. Sobre la *distribución territorial de los afiliados al padrón electoral* en distritos o municipios de la entidad (DADE) se encontraron 7 indicadores, que iban del 22 al 100 por ciento de los distritos electorales. En el *umbral mínimo para la pérdida del registro* (UMPREG) éstas iban del 1.5 al 3%, considerando 4 indicadores. En lo que respecta a las variables de acceso a la representación, la *proporción para presentar candidatos de mayoría relativa en distritos o municipios* (PRCMR) que iban del 22 al 100 por ciento de los distritos electorales, contemplando con ello 11 indicadores. La *barrera electoral para el acceso a la distribución de regidores* (BERP) y *diputados locales* (BEDL) se analizaron por separado al observarse algunas variantes. Aunque en ambos casos estos se ubicaban del 1.5 al 6 por ciento, identificando para cada uno de ellas 4 indicadores. De esta forma, se obtuvieron de manera general 57 indicadores, lo cual hacía complejo una comparación dada la dispersión de datos. Por este motivo y para realizar una comparación más sistemática se procedió a agrupar dichos indicadores en categorías, estableciendo así un orden (ascendente/descendente) y generando cierta homogeneidad entre ellas. (Cuadro 2)

Cuadro 2. Operacionalización de variables

Concepto	Dimensión Empírica	Variables	Indicadores	Cantidad
Sistema de partidos rígido	Acceso a la competencia electoral	Proporción de afiliados sobre el padrón estatal electoral (PAPEE)	0.04, 0.10, 0.11, 0.12, 0.18, 0.20, 0.29, 0.34, 0.35, 0.50, .72, 0.75, 0.79, 1, 1.08, 1.35, 1.76, 2, 2.5	19
		Distribución territorial de éstos en distritos o municipios de la entidad (DE)	22, 30, 37, 41, 51, 60, 66, 70, 100	9
		Umbral mínimo para la pérdida del registro (UPREG)	1.5, 2, 2.5, 3	4
	Acceso a la representación legislativa	Proporción para presentar candidatos de mayoría relativa en distritos o municipios (PCMR)	42, 50, 60, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 78, 100	11
		Barrera electoral para la distribución de regidores plurinominales (BEDREG)	1.5, 2, 2.5, 3, 3.125, 4, 6	7
		Barrera electoral para la distribución de diputados plurinominales (BEDIPP)	1.5, 2, 2.5, 3, 3.125, 4	7

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de las 32 Constituciones y Leyes Electorales Locales

Posteriormente, una revisión estadística mediante el cruce de variables en forma bivariada obteniendo los datos de X^2 de Pearson y V de Cramer mostró el nivel de asociación entre ellas. De manera general se observó una relación media positiva. La asociación más fuerte se dio entre *la barrera electoral para la distribución de diputados de mayoría/ umbral mínimo para la pérdida de registro* que alcanzó un valor en coeficiente de contingencia de .702 y significancia de .000, seguida de la *distribución territorial de electores/proporción para presentar candidatos en distritos*, con coeficiente de contingencia de .692 y significancia de .000, así de ésta última con el umbral mínimo para la pérdida de registro con coeficientes de contingencia de .684 y niveles de significancia de .113. (Cuadro 3)

Cuadro 3. Asociaciones bivariadas

	X ² de Pearson	V de Cramer	Coeficiente de contingencia	significancia
TEE / PAPEE		.506	.582	.292
BERP/ BEDP	27.778	.540	.683	.001
DADE / PRCMR	18.359	.480	.692	.245
BEDP / UMPREG	28.175	.571	.703	.000
PRCMR / UMPREG	30.321	.541	.684	.113

TEE: Tamaño electoral de Estado

PAPEE: Proporción de afiliados sobre el padrón estatal electoral

DADE: Distribución territorial de éstos en distritos o municipios de la entidad

BERP: Barrera electoral para la distribución de regidores plurinominales

BEDL: Barrera electoral para la distribución de diputados plurinominales

PRCMR: Proporción para presentar candidatos de mayoría relativa en distritos o municipios

UMPREG: Umbral mínimo para la pérdida del registro

Lo extraño de ello fue que los niveles de coeficientes de contingencia y significancias entre otras variables que deberían mantener una relación aún más fuerte como lo eran las barreras electorales para la distribución de regidores y diputados plurinominales se mantenía en forma más baja. Aunque pudiera considerarse que no debieran existir variantes significativas entre dichos umbrales mínimos y con el objetivo de identificar las entidades que mantenían diferencias entre estas variables, se realizaron a nivel descriptivo análisis de contingencia. En ellas se encontró que entidades como Campeche, Coahuila, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, en donde la proporción requerida para la distribución de regidores plurinominales eran lo doble a la de diputados, o por el contrario, en cuyos casos como Baja California, Chiapas, Hidalgo, Morelos, SLP, Yucatán en donde la proporción exigida para la distribución de diputaciones plurinominales superaba con mucho la de regidores.

Acceso a la competencia electoral y la representación legislativa

En la idea de conocer que tanto una entidad mantenía el acceso a las fuerzas políticas en la competencia electoral y las posibilidades de alcanzar representación, se construyó un *índice de acceso a la competencia y representación* agrupando los indicadores de las distintas variables y ordenándolos en forma ascendente para así confrontar las semejanzas existentes entre las categorías de las distintas variables. Con ella se construyó un matriz que confrontaba en sus extremos el acceso a la competencia con las posibilidades de representación legislativa. En esta nueva matriz, a manera de cuadrantes los extremos se establecían tres elementos y daban lugar a una conjugación de 9 categorías que iban desde el alto acceso a la competencia con bajas posibilidades de representación al bajo acceso a competencia con bajas posibilidad de representación. La ordenación horizontal de dichas categorías mostraba a su vez una distribución positiva o negativa (Cuadro 4).

Cuadro 4. Matriz de índice de acceso a competencia y representación

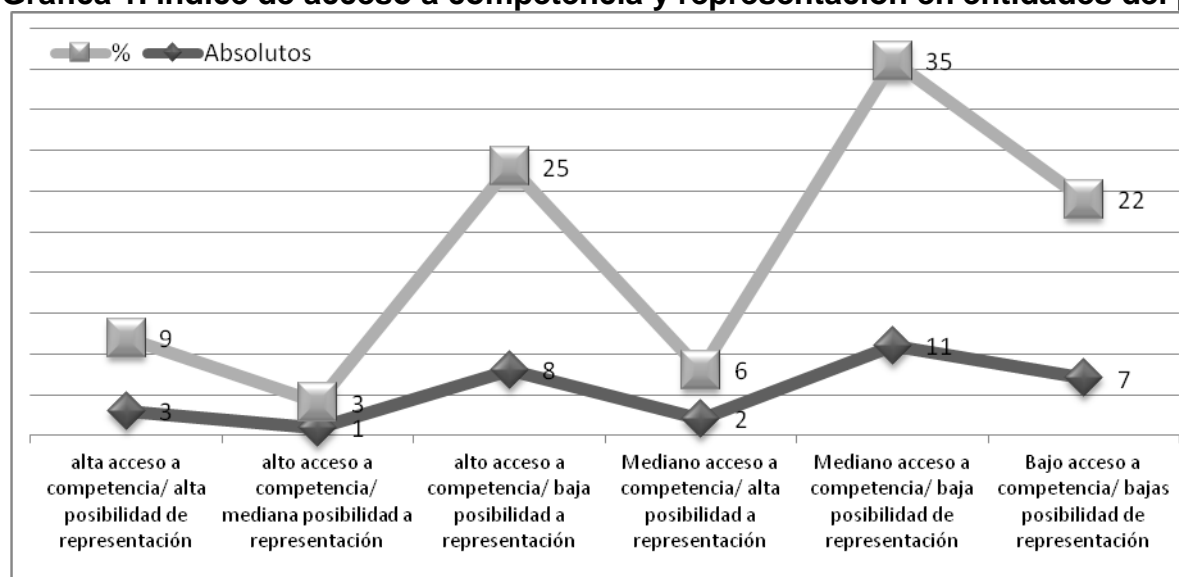
Acceso a la competencia	Variables						
	PAPEE	DADE	PRCMR	UMPREG	BERP	BEDL	
Alto	.10 - 0.5	22-50+1	42-50	1.5	1.5	1.5	Alta
Mediano	.72-1.08	60-66	60-68	2	2-2.5	2-2.5	Mediana
Bajo	1.35-2.5	70-100	70-100	3	3-6	3-6	Baja
	PAPEE	DADE	PRCMR	UMPREG	BERP	BEDL	Acceso a la representación
	Variables						

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de las 32 Constituciones y Leyes Electorales Locales

Confrontando las entidades del país, con las categorías del nuevo índice se observaba que de las 32 entidades del país, 11 (**35%**) estados, entre ellas Chiapas, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Querétaro, **Sinaloa**, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, se ubicaban con mediano acceso a competencia y baja posibilidad de

representación, Otras 8 (25%) entidades en donde se ubicaban Baja California, Campeche, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Puebla se ubicaban con alto acceso a competencia y baja posibilidad a representación. Asimismo, 7 (22%) en donde se encuentran Aguascalientes, BCS, DF, Durango, Morelos, SLP y Tabasco se caracterizaban por mantener un bajo acceso a competencia y bajas posibilidades de representación. (Grafica 1)

Grafica 1. Índice de acceso a competencia y representación en entidades del país



Por el contrario, sólo 3 estados (9%) en donde están Edomex, Nuevo León y Tamaulipas se observaron en el rango de un alto acceso a competencia con alta posibilidad de representación. En 2 (6%) Oaxaca, Quintana Roo, se observó mediano acceso a competencia con alta posibilidad a representación. Finalmente sólo en 1 (3%) Nayarit se encontró alto acceso a competencia/ mediana posibilidad a representación. (Cuadro 4)

Cuadro 4. Índice de acceso a competencia y representación

alta acceso a competencia/ alta posibilidad de representación	alto acceso a competencia/ mediana posibilidad a representación	alto acceso a competencia/ baja posibilidad a representación	Mediano acceso a competencia/ alta posibilidad a representación	Mediano acceso a competencia/ baja posibilidad de representación	Bajo acceso a competencia/ bajas posibilidad de representación
Edomex Nuevo León Tamaulipas	Nayarit	Baja California Campeche Coahuila Guanajuato Guerrero Jalisco Michoacán Puebla	Oaxaca Quintana Roo	Chiapas Chihuahua Colima Hidalgo Querétaro Sinaloa Sonora Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas	Aguascalientes BCS DF Durango Morelos SLP Tabasco

5. Conclusiones

Los acuerdos o arreglos democráticos que han sido producto de la liberalización y democratización política en las entidades del país no muestran a nivel del análisis del sistema de partidos, condiciones de competencia y pluralidad política. Las legislaciones en los estados no marcan una tendencia clara respecto a las “normas electorales aceptables”, lo cual se muestra en la dispersión o falta de homogeneidad.

Aunque, desde luego los criterios de homogeneidad que establecen altos requisitos de acceso a la competencia y la representación no son tampoco deseables. Los ejemplos claros ejemplos los constituyen las entidades del DF, Aguascalientes, Baja California Sur, Morelos, SLP, Tabasco, en donde las barreras electoral para la perdida de registro, coinciden en una proporción muy alta con aquellas para la

distribución de curules y la afiliación de electores al padrón electoral y aunado a la exigencia de estar distribuidos en todos los distritos y delegaciones pone en claro la inexistente posibilidad de acceder a la competencia electoral y la representación. En consecuencia, la mayoría de las entidades del país se caracterizan por un sistema de partidos rígidos en donde el poco acceso a la competencia electoral y la representación legislativa constituyen la constante, en ellos, Sinaloa no es la excepción.

El ámbito electoral ha significado, para el caso de Sinaloa, un camino prolongado de transformación democrática. El régimen político sinaloense se ha modificado de un régimen hegemónico de tipo cerrado a uno de tipo autoritarismo blando, aunque el avance siempre ha sido lento y controlado por una coalición dominante. Las reglas electorales que marcan el acceso a la competencia y representación legislativa son, hasta la fecha un elemento claro de control. Lo interesante de la actualidad es que el proceso político está cambiando, se han sumado nuevos actores en la arena política y algunas de estas reglas deben de cambiar, dado que ese sería sin duda un paso coherente que va en la misma dirección.

Bibliografía

Bartolini, Stefano. "Partidos y Sistemas de Partidos", en Gianfranco Pasquino (comp.) *Manual de la Ciencia Política*, Madrid, 6ª, Alianza Universidad, 1994.

Camou, Antonio, *Transición Democrática y Gobernabilidad en México*, Flacso- Plaza y Valdez, IIS-UNAM, 2000.

Duverger, Maurice, *Los Partidos Políticos*, México, 1987.

Hernández Norzagaray, Ernesto, Sistema electoral y sistema de partidos en Sinaloa. Metodología para el análisis electoral, CEE-UAS-Publicaciones Cruz O., México, 2002.

Luque Rojas, José Manuel, *Consolidación Democrática en Sinaloa 1995-2007: Tipo de transición, partidos políticos y diseño electoral*, PROMEP-PROFAPI-UAS, Once Ríos, México, 2009.

Lijphart, A. "Typologies of Democratic Systems", en *comparative political studies*, 1968.

Moya, Octaviano, *Ley federal de partidos políticos en México, Retos y Perspectivas*, Pluralidad y Consenso, IBDSN, 2003.

Nohlen, Dieter, Democracia, *Transición y Gobernabilidad en América Latina*, IFE, Mexico, 1996.

O'Donnell, Guillermo, *Contrapuntos: ensayos corregidos sobre autoritarismo y democratización*, Paidós, Buenos Aires, 1997.

Przeworski, Adam, Democracia y Mercado, University Press, Cambridge, 1995.

Rae, D. W., *The Political Consequences of Electoral Studies*, New Haven, Yale University Press, 1971.

Reynoso, Votos ponderados. Sistemas electorales y sobrerrepresentación distrital, Cámara de Diputados- FLACSO- Porrúa, México, 2004

Rokkan, S. "The Growth and Structuring of Mass Politics in the Smaller European Democracias", en *Comparative studies in Society and History*, 10, 1968.

Sartori, Giovanni, *Partidos y Sistemas de Partidos*, Madrid, Alianza, 1980.

_____, "Teoría dei Partiti e caso italiano, Milan sugarlo Co. 1982.

Leyes electorales del Estado de Sinaloa, 1979, 1984, 1992, 1995, 1998.